

Puntos en común de la crisis energética y la inflación

■ Los “problemas de la microeconomía” - atraso en la tarifa de servicios e incertidumbre por efecto de las intervenciones gubernamentales- comienzan a generar complicaciones en la marcha de la economía del país.

■ Cada vez resulta más urgente la necesidad de tomar medidas para normalizar tarifas energéticas y recomponer la solvencia fiscal, y esto necesariamente significará un importante freno al fuerte ritmo de expansión actual.

■ El racionamiento energético a los sectores industrial y comercial genera elevados costos. Los efectos negativos de la medida deberían reflejarse sobre los índices de inflación, empleo y actividad industrial de los meses de invierno.

El año en curso marca un punto de inflexión en el ciclo ascendente de la economía de los últimos años. La política de impulsar el crecimiento de la demanda con controles de precios encontró sus límites, en los primeros meses, con la aceleración de la tasa de inflación y a partir de julio, con la llegada de las bajas temperaturas, por el racionamiento en el suministro energético a empresas (gas, energía eléctrica y gasoil).

Las dificultades en el abastecimiento energético revelan que los “problemas de la microeconomía” – atraso en la tarifa de servicios y la incertidumbre por efecto de las intervenciones gubernamentales- comienzan a generar complicaciones en la marcha de la economía del país.

Hay puntos de coincidencia en el problema de la inflación y la crisis energética. Su origen responde a la política gubernamental por fijar precios distintos a los que surgirían en un mercado sin intervenciones, en niveles excesivamente bajos para la energía y elevado para el tipo nominal de cambio. La brecha entre el precio regulado y el precio en ausencia de regulaciones ha impuesto costos crecientes con el transcurso del tiempo; en el caso del mercado de divisas, un alto ritmo de expansión monetaria que presiona sobre los precios; y en el caso del mercado energético, un creciente exceso de demanda que inevitablemente conduce a racionamiento de la oferta. En ambos casos, la corrección de los desequilibrios implicaba medidas que imponían mayor austeridad en el gasto y por lo tanto, de alto costo político. En el sector privado, una normalización de tarifas significaba una disminución en los ingresos reales y una disminución de los márgenes de rentabilidad de las empresas. En el sector público, a fin de liberar al Banco Central del rol de demandante de última instancia para sostener el precio de la divisa y recuperar un mayor grado de control sobre la oferta monetaria, implicaba un sustancial aumento del ahorro estatal para financiar la compra de dólares. Tanto en el problema de la aceleración de la inflación como el de la energía, la postura oficial ha consistido primero en minimizar su importancia, y a medida que se tornaban más graves, disimular sus efectos; apostando a que los eventuales inconvenientes resultarían transitorios y se remediarían con el fuerte crecimiento de la economía.

Además de los problemas señalados, en los últimos meses se suma un tercer factor de preocupación consistente en el deterioro de la situación fiscal por el fuerte aumento del gasto, pese a los niveles record de recaudación. El problema comienza a manifestar sus primeras

señales preocupantes por el lado más débil, los gobiernos provinciales. Tanto la administración de la provincia como la de la ciudad de Buenos Aires, cerrarán el actual ejercicio financiero con un elevado déficit. Más allá del incremento de gastos en obra pública observable en el tiempo que antecede a elecciones, el factor que desequilibra las finanzas estatales es el aumento de gastos corrientes en concepto de salarios y subsidios, presionados por la inflación. De un modo similar al problema de la inflación y la crisis energética, estos primeros indicios plantean dudas sobre la posibilidad de mantener un superávit elevado en los próximos años, en caso de continuar postergando reformas en la estructura de la administración pública y regímenes de coparticipación de impuestos.

Pese a que la posición macroeconómica aún puede ser definida como sólida en función del positivo contexto internacional, el ritmo de fuerte crecimiento en el PBI, la disminución del desempleo y el superávit en el sector externo; se observa un cambio de expectativas por los efectos negativos de los problemas señalados. Sus costos son cada vez menos disimulables. Pese a los controles de precios y la manipulación de índices oficiales, se ha instalado en la sociedad la percepción de una inflación que no cede, en tanto que, el efecto negativo de las intervenciones sobre bienes (carne, lácteos, combustible) y servicios (gas) que impactan en el costo de vida, queda expuesto por los problemas de abastecimiento.

Costos del racionamiento energético y de la inflación

El racionamiento energético al sector industrial y comercial genera altos costos. Los más evidentes consisten en la disminución en el nivel de actividad y por lo tanto, del ritmo de crecimiento económico. Las suspensiones de personal por paradas de plantas añadirán nuevas presiones alcistas sobre el índice de inflación por un doble efecto, los mayores costos de las empresas y la disminución de oferta por caída de la producción. Por otra parte, también podría impactar en forma negativa sobre los indicadores de empleo. Los efectos deberían reflejarse sobre los índices de inflación, empleo y actividad industrial de los meses de invierno.

El efecto de los cortes principalmente recaerá sobre actividades industriales a gran escala, muy intensivas en el uso de gas y el electricidad, como es el caso de las plantas del Complejo Petroquímico de Bahía Blanca, con procesos continuos de producción y por lo tanto, con altos costos por la interrupción y reinicio de la actividad. La incertidumbre en la provisión de energía paraliza proyectos de inversión, particularmente en sectores industriales con proyectos a gran escala.

En el largo plazo, la única salida consiste en aumentar y diversificar la inversión en generación energética. El país requiere urgente inversiones en plantas para la generación de energía y la normalización de tarifas, en modo particular, de usuarios residenciales. La inversión pública financiada con fideicomisos, exhibe una notoria ineficacia revelada por los casi nulos avances de proyectos anunciados hace ya más de un año; a lo que suma el desprestigio por la sospecha de pagos de sobrepagos en la licitación para la construcción de nuevos gasoductos. La inversión privada no aparecerá en la medida que las reglas del sector no generen un nivel atractivo de rentabilidad en forma estable y duradera. Por el momento, la respuesta oficial consiste en intentar acelerar los proyectos en marcha y negociar nuevas fuentes de abastecimiento externo de energía, sin advertirse por el momento, señales positivas para aumentar la explotación en el país de su abundante dotación de recursos energéticos.

La preocupación por la inflación ha quedado momentáneamente relegada por el problema energético. El índice de precios al consumidor mantiene su curso ascendente y genera incertidumbre sobre los ingresos futuros de la población. La persistencia de la tasa de inflación en niveles elevados, muy superior a los poco creíbles índices oficiales, agrava la situación social, que si bien evidencia importantes progresos desde la última crisis, aun se caracteriza

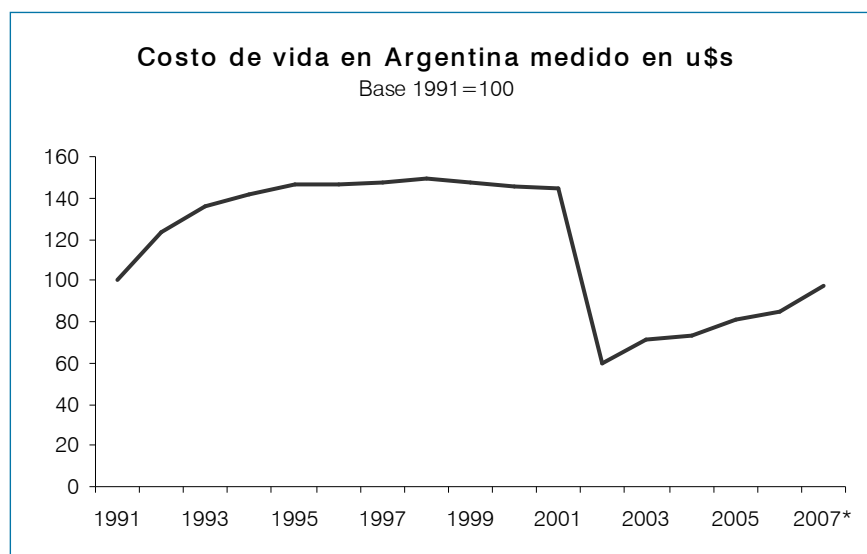
por elevados niveles de indigencia y pobreza. Por otra parte, las ventajas de la devaluación del peso para el sector industrial se ven diluidas con el transcurso del tiempo. Algunos sectores orientados al mercado interno comienzan a exhibir problemas de rentabilidad por el aumento de los costos, agravados durante el año por la dificultad en la provisión de energía y la preocupación de un fuerte crecimiento de las importaciones. La devaluación del dólar frente a las principales monedas y el aumento de los precios de los productos exportables contrarrestan el efecto de la inflación interna, pero no modifican la tendencia a mediano plazo de una gradual apreciación cambiaria.

Además de la presión sobre los índices de pobreza y los márgenes de rentabilidad de empresas expuestas a la competencia internacional, cabe advertir un costo adicional de la aceleración en la tasa de inflación. A medida que aumenta la inflación, se amplía la brecha o atraso de precios intervenidos con respecto a precios no regulados. La mayor distorsión impuesta por los controles de precios, anticipa un costo cada vez mayor para corregir los desequilibrios. Desde una perspectiva política, también crecen los incentivos para posponer medidas correctivas. Aunque pasen un tanto desapercibidas, la distorsión creciente de precios relativos genera importantes pérdidas por ineficiencias en la asignación de recursos, al disminuir la inversión en sectores con comprobado potencial de desarrollo, en un contexto internacional sobresaliente pero con precios controlados, como pasa actualmente con la ganadería y el sector energético.

Se aproxima el momento de definiciones

Frente al surgimiento de problemas graves de funcionamiento de los mercados, con desabastecimiento de productos y sectores cuyo funcionamiento depende cada vez más de subsidios estatales crece el consenso, aún dentro del propio gobierno, sobre la necesidad de introducir ajustes en la estrategia de política económica una vez finalizado el proceso electoral. La crisis energética y la aceleración de la inflación han puesto en evidencia la imposibilidad de continuar con la estrategia de soslayar los problemas postergando definiciones de alto costo político.

Para el próximo gobierno se perfila un escenario económico más difícil. Cabe esperar que el factor más relevante para la marcha de la situación económica, el contexto internacional, continúe incidiendo positivamente a través de altos términos de intercambio para el país. Por lo menos, durante los próximos dos a tres años se presentarían dificultades en el abastecimiento energético, siempre y cuando se retome en poco tiempo el desarrollo de proyectos que



permitan aumentar la capacidad del sistema. La moneda local mantendrá su tendencia a la apreciación en términos reales; por lo tanto, los costos internos presionarán sobre los márgenes de rentabilidad de las empresas, entre ellos, la presión tributaria. Las empresas locales enfrentarán una mayor competencia externa por el aumento de las importaciones. El aumento del salario real estará limitado por el crecimiento de la productividad y niveles de rentabilidad de las empresas, por lo que se comprimirá el espacio de negociación de ajustes salariales con sindicatos. Los problemas de abastecimiento de productos impondrán la necesidad de comenzar a remover controles de precios para generar incentivos para aumentar su oferta. Este salto en los precios significará un retroceso en el ingreso real de la población.

En este contexto, le cabe al próximo gobierno el desafío de asumir la difícil tarea de comenzar a resolver los desequilibrios micro acumulados desde la devaluación del peso. A partir de un creciente consenso sobre la necesidad de revisar los lineamientos de política económica, se comienza a perfilar un nuevo debate en torno al alcance de las medidas que conformarían la nueva agenda del gobierno. La contención de la inflación requiere una rápida desaceleración de la demanda agregada. Los principales instrumentos consisten en aumentar el ahorro público, disminuir el ritmo de emisión monetaria.

Las primeras reacciones de representantes del pensamiento oficial apuntan a la consolidación del superávit fiscal, con un mayor control sobre el crecimiento del gasto público, descartando cambios sustanciales en la política monetaria y una importante apreciación del tipo de cambio real. Una posición intermedia, reconocería la necesidad de enfatizar el esfuerzo de contención del gasto público, avanzando en forma flexible y gradual con cambios en la política monetaria. Estos extremos probablemente contienen el perfil de los lineamientos de la política económica en caso de continuar la actual línea de gobierno.

La solidez fiscal representa una condición indispensable para alejar la posibilidad de futuras crisis y por lo tanto, plantear este objetivo representa un paso positivo para consolidar la posibilidad de crecimiento a largo plazo. Un mayor ahorro público representaría un avance fundamental en dirección a contener la tasa de inflación pero insuficiente para retomar la senda del crecimiento sostenible.

El país requiere alcanzar un sendero estable de crecimiento y para este objetivo, además de la estabilidad de precios, importan la inversión, los niveles de productividad y el ritmo de innovaciones, para la cual, resultan indispensables mercados amplios y competitivos. Además de la contención del gasto, la agenda de política económica también debería contemplar la remoción de distorsiones (subsidios, retenciones a la exportación, controles de precios) que afectan el funcionamiento de mercados, e inspirar confianza con reglas claras y estables.

La postergación en la resolución de desequilibrios presenta altos costos que en algún momento habrá que enfrentar. La incertidumbre sobre el futuro del país se relaciona con un interrogante que el tiempo no alcanza a develar, ¿habrá voluntad política para corregir estos desajustes anticipando a las crisis?, y llegado el momento, ¿estarán dadas las condiciones políticas para hacer los cambios necesarios? Igual que a fines del 2005, las expectativas de analistas se concentran en el tiempo posterior a las elecciones, cuando hay margen para introducir cambios y asumir los costos políticos de los ajustes. Si el cambio se limita a aumentar el superávit fiscal, sería un importante avance en dirección a contener la tasa de inflación, pero insuficiente para resolver los problemas de competitividad y por lo tanto, habrá que acostumbrarse a convivir con tensiones e incertidumbre. ■